

La Bolivia del MAS: un balance sobre el Proceso de Cambio

Patricio Grande*
Natalia Wiurnos**

Artículo publicado en *Ni Calco Ni Copia Revista del Taller de Problemas de América Latina* (UBA), N° 9, Imprenta Dorrego, Buenos Aires, 2021, pp. 15-39.

Introducción

Este artículo propone realizar una contribución a la luz de construir un balance en términos históricos y políticos sobre la experiencia de los (casi) catorce años de gobierno de Evo Morales Ayma y su Movimiento al Socialismo en Bolivia. Una tarea imprescindible considerando los vertiginosos acontecimientos abiertos luego de la elección presidencial del 20 de octubre de 2019 y que algunas semanas después (10 de noviembre) culminaron con un Golpe de Estado cívico-policial-militar, interrumpiendo de manera abrupta y violenta el tercer mandato presidencial consecutivo de Evo.

Para ello se recuperan aquí aquellos temas que fueron nodales y controversiales durante las tres administraciones del MAS como: la Asamblea Constituyente y la Nueva Constitución, la llamada nacionalización de los hidrocarburos, la redistribución de la tierra, la relación del partido gobernante con los movimientos sociales, las alianzas internacionales y la “reelección permanente” de Evo, entre otros. Este trabajo se nutre, fundamentalmente, de la revisión de diversas investigaciones realizadas por los presentes autores y que fueron producidas al calor del llamado “Proceso de Cambio”.¹

El MAS: origen y ascenso

Luego del ciclo insurreccional popular anti-neoliberal (y más allá) que entre los años 2000 y 2005 conmocionó a toda Bolivia, el triunfo electoral del binomio Morales-García Linera abrió una nueva etapa política en la historia boliviana. La llegada de un presidente aymara, sindicalista y dirigente cocalero que contaba con el respaldo mayoritario del movimiento indígena y campesino, trastocó la escena política nacional e internacional y dio curso a una serie de inmediatas transformaciones en el plano económico, social y hasta cultural. Transformaciones o reformas que con sus avances, limitaciones y derivas en buena medida fueron tributarias del movimiento social insurreccional abierto en 2000 (“Guerra del Agua”) y cuyo momento más álgido fue en 2003 durante la “Guerra del Gas”.

El ascenso del MAS-IPSP como un partido de izquierdas y de base rural-subalterna que logró disputar posiciones de poder real durante una década en la política nacional (1995-2005), fue fruto de una trabajosa, sistemática y silenciosa labor política que se remonta hacia mediados de la década de 1980. La conformación del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) es un hecho extraordinario en la historia política boliviana y también latinoamericana. De base social cocalera, nació como la expresión política

* Docente de la Universidad Nacional de Luján, Depto. de Educación.

** Docente de la Universidad Nacional de Luján, Depto. de Educación.

¹ Tesis de posgrados, artículos académicos, ponencias presentadas en eventos científicos, notas de campo, entrevistas, etc.

directa de los movimientos/organizaciones indígenas-originarias y campesinas quienes, luego de profundos debates y disputas internas, resolvieron que era imprescindible generar “su” propio Instrumento (o partido) Político. Esta herramienta sería la que, en un futuro cercano, les permitiría lograr por la vía electoral el acceso y control directo del Estado.

La tesis de crear un “instrumento” que permitiera a los movimientos indígenas-campesinos y sindicatos rurales participar como actores políticos principales del Estado (sin intermediarios externos) fue elaborada en los años ‘80 y se cristalizó una década después con la creación del Instrumento Político y su rápida proyección nacional. Sin embargo, fuertes debates y rencillas internas se dieron en el seno de los movimientos indígenas y campesinos, principalmente en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), enfrentando a su interior a los sectores kataristas del altiplano y los cocaleros de El Chapare. Triunfó la postura de éstos últimos: aprobándose en el Congreso de “Tierra y Territorio” de 1995 (con hegemonía cocalera) el Instrumento Político como partido de los indígenas y campesinos de “liberación, anticapitalista y anticolonial”.

En un principio el Instrumento llevó el nombre de Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) y pocos años después mutaría en MAS-IPSP. Además de la CSUTCB, participaron de ese Congreso otras organizaciones como la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), la Federación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (FNMCIQB “BS”)² y la Confederación Sindical de Colonizadores e Interculturales de Bolivia (CSCIB).³

A partir de ese momento, el Instrumento Político participó en distintas elecciones de carácter municipal y nacional (en los años 1995, 1997 y 1999) posibilitando que indígenas, campesinos y líderes sindicales puedan ocupar bancas en el parlamento (35 en 2002) y que Evo Morales, su máximo dirigente, obtuviera en 2002 el segundo puesto en la elección presidencial. Algunas de las razones que explican este enorme salto a la política nacional del Instrumento Político, ya bajo las siglas del MAS-IPSP, responden a razones como la deslegitimación de los “partidos tradicionales” (MNR, ADN, NFR, MIR, etc.), los efectos devastadores de las políticas neoliberales implementadas desde 1985, la representación étnica (indígena) y rural que expresaba este partido, la instauración a nivel nacional de la hoja de coca como el símbolo de la lucha anti-imperialista y de todas las naciones oprimidas del país y, finalmente, la articulación entre sectores del campo y la ciudad forjada al calor del ciclo insurreccional.

Fue en las elecciones de 2005 que el MAS-IPSP logró su primer e histórico triunfo con el 53,7% de los votos, colocando a Evo Morales y García Linera al mando del Poder Ejecutivo Nacional. Así el MAS llegó al Palacio Quemado, desplegando un marcado discurso anti-neoliberal (y en parte también anti-capitalista), con la obligación de poner en marcha un enorme y transformador programa de reivindicaciones populares impulsadas por los movimientos y organizaciones sociales: la Asamblea Constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos, justicia para los muertos de las movilizaciones de 2003 y 2005, Reforma Agraria y Autonomías, entre otras. De esta manera, el MAS asumió su primera presidencia bajo el rótulo de ser “el gobierno de los movimientos sociales”.

² Desde 2007 se constituyó como “Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa”.

³ En la actualidad se denomina como “Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia”.

El triunfo de Evo, en medio de una coyuntura política extraordinaria, dio paso a una nueva etapa donde, al menos en lo inmediato, la antigua elite política fue reemplazada por “una nueva clase dirigente considerada lo ‘más bajo’ del orden social”.⁴ No obstante, ya en los primeros años de su gestión el mismo fue criticado por intelectuales indianistas que veían en los principales mandos de gobierno una escasa participación indígena. Por ejemplo la revista *Willka* en su edición N° 1 tituló: “Evo Morales: entre entornos blancoides. Rearticulación de las oligarquías y movimientos indígenas”.⁵

De la nacionalización de los hidrocarburos a la consolidación del modelo extractivista

Durante el primer gobierno del MAS se concretaron importantes medidas gubernamentales. La promulgación del Decreto Supremo 28701 sobre la “Nacionalización de los Hidrocarburos” a pocos meses de la asunción de Morales (1° de mayo) fue una de ellas, ya que a partir de entonces se instó a las compañías privadas del sector a firmar nuevos contratos en un plazo de 180 días. Esto significó que dichas empresas se encontraban, a partir de entonces, sujetas a fuertes controles estatales, nuevas cargas impositivas y a una importante reducción de su paquete accionario que se desplazaba hacia el Estado boliviano. De esta manera, se concretaba la nacionalización (parcial) de los recursos hidrocarburíferos, aunque sin expropiación y bajo la explotación mixta entre el Estado y las empresas multinacionales.

El anuncio público de la nacionalización se realizó en el campo “San Alberto” (Tarija) y contó con una fuerte y destacada presencia simbólica de las Fuerzas Armadas. Así, recuperando una tradición de carácter nacionalista, Evo y el MAS buscaban incorporar a los altos mandos militares al nuevo proceso político.

Según el vicepresidente García Linera, el Estado extraería de la explotación de los hidrocarburos el excedente necesario para redistribuir en el conjunto de la población a fin de superar los altos índices de pobreza y atraso económico; para ello era necesaria la inversión de capitales extranjeros que acompañasen la iniciativa estatal. Sin embargo, la forma en la que se negoció la repartición de la producción y comercialización dio paso a un fuerte debate sobre si se trataba de una “nacionalización” o una “re-negociación” debido a que el capital extranjero seguía gozando de una cuota de beneficio y resguardo económico, aún bajo los nuevos términos que estableció el Estado boliviano a partir de 2006. A pesar de ello fue innegable que el citado Decreto Supremo inauguró una nueva correlación de fuerzas entre el Estado y las empresas multinacionales, correlación que tendió a fortalecer al Estado, quien a partir de entonces asumió un rol de mayor protagonismo en una economía que en teoría debía estar orientada a impulsar un nuevo modelo de desarrollo económico pos-hegemonía neoliberal.

De esta manera, la nacionalización supuso un cambio significativo en la explotación de los recursos naturales en beneficio del Estado, quien a partir de ello pudo incrementar sus ingresos por la exportación de gas hacia otros países. En los últimos años, lo hizo en grandes volúmenes a Brasil y Argentina, y se estima que para 2013 la mayor cantidad de ingresos impositivos provenía de este sector, coincidiendo con el mayor aumento del

⁴ Luis Tapia. *La coyuntura de la autonomía relativa del estado*, CLACSO, Muela del Diablo, La Paz, 2009.

⁵ *Revista Willka*. “Evo Morales entre: Entornos blancoides. Rearticulación de las oligarquías y Movimientos indígenas”, Año 1, N° 1, El Alto, 2007.

Producto Bruto Interno que tuvo Bolivia hasta dicho año;⁶ posteriormente a 2014 la renta proveniente de los hidrocarburos comenzó a descender sin recuperación incluso hasta 2018. Cabe destacar, que el incremento de la renta proveniente del sector hidrocarburífero permitió durante las gestiones masistas elevar el gasto público plasmándose ello en inversiones sociales en los sectores de salud, educación y protección social para la tercera edad. Un hecho que propició la baja de la pobreza del 60% al 30% (aprox.) en poco más de una década.⁷ También durante los años del masismo hubo un crecimiento significativo de los llamados “sectores medios urbanos”, alcanzando según algunas estimaciones al 62% de la población hacia 2015.

No obstante, este cambio estuvo también acompañado de ciertas críticas que exhiben las flaquezas de la economía boliviana: por un lado, la debilidad de la bonanza económica basada en la dependencia de los precios internacionales, aspecto que refuerza el carácter dependiente de Bolivia respecto de los mercados mundiales; y por otro lado, la puesta en práctica de un modelo extractivista basado en la alta explotación de los recursos naturales, dejando aún en manos extranjeras gran parte de las ganancias. De acuerdo a algunos análisis, y parafraseando al propio Morales, el Estado boliviano terminó convirtiéndose en socio de las corporaciones extractivistas.

Siguiendo a Svampa, también emerge una crítica de carácter “ecoterritorial”: el Estado discursivamente propuso un modelo de desarrollo comunitario, e incluso en consonancia con el “buen vivir” y el respeto a la Madre Tierra, pero en paralelo consolidó una matriz productiva propia de la modernidad hegemónica basada en el extractivismo. Por parte del gobierno fue García Linera quien siempre tomó la palabra al momento de defender el proyecto productivo masista alegando que se procura generar una “relación técnica con la naturaleza” y que gracias a esta explotación se aseguraron los beneficios sociales que permitieron la superación de las condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad de la población.⁸

A estos problemas, se suma que el gobierno permitió a lo largo de sus tres períodos que ciertas áreas protegidas y de territorios indígenas fueran abiertas a la explotación hidrocarburífera y de minerales, reforzando así el extractivismo y vulnerando derechos de las comunidades indígenas. Esto produjo como efecto inmediato la reacción de muchos grupos indígenas que, rompiendo con el apoyo al partido de gobierno, comenzaron a denunciar el avance sobre sus territorios y el avasallamiento de sus derechos amparados constitucionalmente.

Tierra, reforma agraria y reconducción

Otra de las medidas centrales que tomó el “Proceso de Cambio” al principio de su gestión fue la sanción de la “Ley de Reconducción de la Reforma Agraria”. La misma, a grandes rasgos, tuvo como objetivo redireccionar (“reconducir”) la Reforma realizada en 1996, ahora imprimiéndole una serie de cambios que tendían, en principio, a mejorar los mecanismos por los cuales se lograría una serie de objetivos ligados a la tierra, su

⁶ Cristian Faundes. “La construcción del poder nacional en la Bolivia de Evo Morales (2006-2014)”, *Revista UNISCI*, N° 38, mayo de 2015, pp. 125-154.

⁷ Emiliano Mussi. “Renta de la tierra hidrocarburífera en Bolivia y sus mecanismos de apropiación (2007-2017)”, *Revista Tehomai*, N° 39, septiembre de 2019, pp. 186-208.

⁸ Maristella Svampa. *Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo*, Edhasa, Buenos Aires, 2016.

redistribución y posesión: ampliar la propiedad comunal, sanear y titular más tierras en favor de la propiedad indígena y campesina, disminuir la formación del latifundio, reconocer el acceso no sólo a la tierra sino también al territorio por parte de las comunidades indígenas y reconocer formas de propiedad colectiva. Se recogieron de esta manera algunas de las históricas demandas de los movimientos indígenas y campesinos, base social substancial de apoyo del masismo. Un dato importante al respecto es que en siete años (entre 2007 y 2014) se titularon tres veces más tierras que en los diez años anteriores; en cuanto a los resultados generales, tomando como punto de partida 1996, hasta 2015 se sanearon 77 millones de hectáreas de las 106 millones totales, es decir alrededor del 72%.⁹

Sin embargo, los balances a más de una década de la Reconducción no parecerían ser del todo óptimos, o al menos se presentan como variados y controvertidos, y en ese sentido caben destacar al menos dos cuestiones. Un primer aspecto a señalar, y que desnuda la conflictividad social al interior de los movimientos indígenas y campesinos, fue la disputa entre aquellos sectores que defendían la titularización de tierras a nivel individual y aquellos que lo hacían en favor la titularización colectiva de Territorios Indígenas. Con el tiempo, este enfrentamiento se volcó en favor de la titularización individual (ya que si bien no se abandonó la colectiva, sí se incrementó mucho más la individual) defendida por los principales sindicatos campesinos que apoyaron y siguen sosteniendo a Morales y el MAS. Un segundo aspecto a resaltar es que esta Reconducción también favoreció el fortalecimiento de la propiedad de los sectores agro-empresariales quienes a partir de la puesta en marcha de este nuevo entramado jurídico lograron ampliar y legalizar la propiedad de la tierra. En este sentido si bien fueron innegables los avances realizados a partir de 2006 en materia de redistribución y saneamiento de la tierra, también es importante señalar que esta distribución no necesariamente generó una mayor equidad en el ámbito rural. Por el contrario, una tendencia que se puede observar es que las tierras más productivas fueron tituladas a mano de los grandes empresarios (a través de la “mediana propiedad” y “empresa agrícola”) quienes se apropiaron de las herramientas técnicas y legales que posibilitaban la regularización de sus explotaciones. Asimismo, gran parte de las propiedades tituladas que fueron a favor de grandes empresas se concentraron en la “media luna”, especialmente en Santa Cruz de la Sierra.

El proceso Constituyente: demandas y conflictos en el camino hacia la NCPE

El avance político más importante alcanzado durante el primer gobierno fue la sanción de una Nueva Constitución Política del Estado boliviano (NCPE). Ésta fue el resultado de un largo proceso que concluyó en agosto de 2006 con la puesta en marcha de la Asamblea Constituyente, demanda histórica de los movimientos indígenas y campesinos y de la denominada “agenda de octubre”. En este sentido, fue durante el primer gobierno del MAS cuando se logró finalmente conformar la Asamblea que, no sin conflictos, construyó una nueva carta magna.

Sintéticamente, se puede afirmar que el proceso constituyente tuvo varias etapas y fue atravesando en su interior diversos conflictos y enfrentamientos provenientes tanto de los sectores más conservadores (y anti-masistas) como también de grupos indígenas y campesinos (aliados del MAS).

⁹ *Anuario 2015*. INRA, 2015.

En primer lugar, cabe mencionar que la misma ley de convocatoria a la Asamblea ya presentó problemas y generó tensiones entre el gobierno y diversos sectores indígenas y campesinos ya que, a diferencia de la propuesta de las organizaciones sociales reunidas en el Pacto de Unidad,¹⁰ la ley que se terminó sancionando prescribió que la elección de los asambleístas no era a través de los usos y costumbres de cada pueblo sino que se motorizó a través de los partidos políticos: es decir, los representantes asambleístas debían postularse solamente mediante los partidos políticos y si bien el MAS garantizaba una buena proporción de representantes campesinos e indígenas, esta mecánica no siguió los preceptos resueltos por las propias organizaciones.

La Asamblea Constituyente funcionó a partir de diversas comisiones en donde los distintos representantes recibían y analizaban las propuestas alcanzadas por distintos organismos civiles, movimientos sociales y ciudadanos, incluso algunas confederaciones indígenas y campesinas habían elaborado sus propios proyectos constituyentes y los presentaban ante las comisiones. Cada uno de los tópicos que conformaba el articulado de la Nueva Constitución era discutido en dichas comisiones y algunos de los más destacados fueron: plurinacionalidad, ordenamiento territorial y autonomías, tierra, recursos naturales; dentro de estos temas los propios integrantes del Pacto de Unidad encontraron tensiones y desencuentros. Por ejemplo las discusiones en torno a las formas de titulación de la tierra (colectiva e individual o “mixta”), la propiedad de los recursos naturales (del Estado o de los pueblos indígenas), autonomías (respeto de los límites ya establecidos o posibilidad de reconstrucción de límites originarios). A pesar de estas tensiones y conflictos entre los movimientos integrantes del Pacto de Unidad y entre alguno de ellos y el MAS, la estrategia fue seguir unidos y procurar llegar a acuerdos posibles.

Asimismo, la Asamblea Constituyente sufrió una serie de modificaciones primero, en su forma de funcionamiento y después, en su resultado (la NCPE). Es decir, el proceso constituyente más allá de las discusiones entre los propios representantes indígenas y campesinos y el MAS, tuvo que atravesar difíciles momentos que hicieron peligrar su continuidad. En primer lugar, la Asamblea no sesionó siempre de la misma manera ni en el mismo lugar: durante los años 2006 y casi todo 2007 funcionó en Sucre y convivió con constantes movilizaciones, marchas, enfrentamientos y episodios violentos protagonizados por sectores que se oponían al nuevo orden nacional propuesto por el MAS y la constituyente (sectores de la “media luna” y de oposición de Sucre, representantes de un alto grado de racismo). Por esta situación, a fines del 2007 la Asamblea se tuvo que trasladar a Oruro para resguardar la seguridad de los constituyentes y la posibilidad de que la Asamblea siga en pie. Allí se aprobó la denominada “Constitución de Oruro”, aunque no fue ésta la que finalmente se transformó en la NCPE.

En segundo lugar, la NCPE no fue el resultado directo de la participación de los asambleístas que fueron quienes durante más de un año discutieron el texto constitucional en comisiones. Por el contrario, los levantamientos de la derecha en la “media luna” y la crisis institucional del 2008 abierta a partir de los hechos de violencia de Santa Cruz, condicionaron el desenlace de la constituyente, abriendo un proceso denominado “de concertación”. La magnitud de la crisis “desconstitucionalizó” el proceso constituyente al establecer (como única salida posible de la crisis abierta en 2008) que el texto constitucional final debía acordarse entre representantes del legislativo, representantes

¹⁰ El Pacto de Unidad fue una instancia de coordinación y articulación entre distintos movimientos indígenas y campesinos. Los más importantes fueron CSUTCB, CIDOB, CSCIB, CONAMAQ y FNMCIQB.

departamentales y, por último, el debate en el Parlamento. Este hecho generó que se revisaran y modificaran más de 150 artículos de la “Constitución de Oruro”, que favorecieron a los intereses de la derecha.

Pueden mencionarse como ejemplos modificaciones en artículos de gran sensibilidad a intereses políticos y económicos como los relacionados con el goce exclusivo de los recursos naturales por parte de los pueblos indígenas en sus territorios¹¹, pero desde la concertación “siempre que no perjudique derechos legalmente adquiridos por terceros”; respecto a la representación parlamentaria en la Asamblea Plurinacional, la concertación limitó más aún la participación de los pueblos indígenas, afrodescendientes e interculturales a una minoría numéricamente muy baja¹²; la quita del “control social” del pueblo en decisiones de políticas públicas¹³; cercenó la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan reconstruir entidades territoriales autónomas remontándose a límites originarios¹⁴; amplió las competencias de los gobiernos autonómicos departamentales.

A pesar de todas estas controversias, y de lo “negociado o pactado” del proceso, la NCPE fue finalmente aprobada por el Parlamento y validada mediante un “Referéndum Constitucional Aprobatorio”. Lo importante a destacar es que aún con todas estas dificultades, modificaciones y limitaciones del nuevo texto constitucional, la estrategia de los movimientos indígenas y campesinos fue en general procurar su unidad y lograr el mayor equilibrio con el MAS, aún en momentos en los que éste debió concertar el proceso constituyente.

Así la NCPE, a pesar de todo, logró sentar las bases para una nueva estatalidad en Bolivia. Preceptos como plurinacionalidad, autonomías, derechos indígenas, tierra y territorio, participación de los indígenas y campesinos en la gestión de recursos naturales, nacionalización de los hidrocarburos, entre otros tantos, quedaron como parte integral un nuevo Estado Plurinacional que nació oficialmente el 22 de enero del 2010.

Conflictos sociales y antagonismos políticos

a. El desplazamiento desde la “media luna” hacia el interior del Pacto de Unidad

Tal como fue explicado más arriba, durante los primeros tiempos al frente del Estado tanto para el MAS como para las organizaciones integrantes del Pacto de Unidad, la Asamblea Constituyente fue el mayor desafío. En torno a la Constituyente se generó una gran expectativa de transformación pero también una enorme conflictividad política y social.

En paralelo a la Constituyente se fue conformando en áreas urbanas de la región oriental un fuerte antagonismo al gobierno nacional, articulado centralmente sobre la demanda de las autonomías departamentales y la redistribución de la renta hidrocarburífera recapturada por el Estado nacional luego de la promulgación del Decreto 28701.

La oposición regional fue encabezada por los prefectos y los llamados “líderes cívicos” de los departamentos de la “media luna”, agrupados en el Consejo Nacional Democrático (CONALDE) que funcionaba como una suerte de instancia coordinadora del núcleo opositor. El punto más álgido del conflicto fue en septiembre de 2008 cuando en la

¹¹ Por ejemplo el Artículo 30, II, 17.

¹² Artículos 146, 147 y 148.

¹³ Artículo 141.

¹⁴ Artículo 290 y ss.

localidad del Porvenir (Pando) se produjo la matanza de campesinos que se movilizaban en favor del MAS. Este hecho provocó la destitución del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quién fue signado como responsable intelectual de la masacre. Horas antes de este acontecimiento Evo había ordenado la expulsión del país del embajador de los EE.UU, Philip Goldberg, acusado de conspirador y secesionista. El propio presidente de Bolivia fue quién denunció que “un golpe de Estado atípico estaba en marcha”.

Ante estos hechos la administración masista obtuvo, por medio de la recientemente creada Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el respaldo unánime del bloque de países vecinos. Al mismo tiempo, al interior de Bolivia consiguió el apoyo de las principales organizaciones sociales y sindicales, entre las que se encontraba la COB (hasta el momento había sostenido un accionar opositor al MAS), nucleadas ahora en la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM). Así, ante una coyuntura determinante, el Movimiento al Socialismo demostró una capacidad de organización y movilización enorme. Es decir, que el MAS combinó movilización social y negociación con la oposición (vía NCPE).

Ya en el segundo gobierno de Evo, a diferencia del primero, la principal conflictividad socio-política no provino del bloque regional de la “media luna” sino de las propias filas del masismo o de sus aliados. Es decir que se produjo un importante desplazamiento en la conflictividad, desde las blancas oligarquías regionales de la “media luna” hacia el interior del movimiento indígena agrupado en el Pacto de Unidad.

Sin embargo, es importante no dejar de señalar que varios de estos elementos contradictorios, entre el gobierno y “sus bases”, ya estaban presentes desde los comienzos de la primera gestión, aunque de manera subrepticia. Así, desde el año 2010 emergieron una enorme cantidad de demandas no resueltas durante la primera presidencia.

La conflictividad social y los antagonismos aglutinaron a un amplio espectro de actores y problemáticas: la defensa de la administración y gestión del territorio y de los recursos naturales, demandas relacionadas al incremento salarial y la redistribución de las riquezas entre capital y trabajo y el control estatal sobre los precios de bienes de consumo interno.

Fue entonces durante este segundo gobierno cuando se produjo un hecho político de enorme trascendencia: el resquebrajamiento interno o la fractura del bloque social y popular agrupado en el Pacto de Unidad y también en la CONALCAM; y junto a ello una cierta reconfiguración de las alianzas entabladas por el masismo, donde por ejemplo quedaron relegados de las decisiones de gobierno CIDOB y CONAMAQ.

Desde el inicio mismo de esa segunda gestión masista ya se registraron enfrentamientos entre sectores de trabajadores nucleados en la COB que denunciaban la inexistencia de verdaderos cambios a nivel productivo y salarial. En este marco se desató el denominado “gasolinazo” cuando, mediante un Decreto Supremo, se generó una suba en los precios de los carburantes internos. Esta medida fue fuertemente resistida por la COB pero también por muchas de las organizaciones nucleadas en el Pacto de Unidad; frente a la presión de la protesta social, el gobierno decidió dar marcha atrás con el Decreto bajo la consigna de “mandar obedeciendo al pueblo”.

No obstante, el conflicto más importante y que marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Bolivia fue en torno al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS): la construcción de una carretera que debía atravesar este territorio para unir el Departamento de Cochabamba con el de Beni. Este proyecto gubernamental generó una crisis (y una ruptura de hecho) al interior del Pacto de Unidad, un enfrentamiento entre las organizaciones indígenas y campesinas y entre algunas de ellas y el gobierno: precisamente

la CIDOB y el CONAMAQ fueron los movimientos que abiertamente comenzaron a denunciar el avasallamiento que el gobierno produciría sobre territorios indígenas con la puesta en marcha de la construcción de la carretera. El conflicto del TIPNIS vino a exacerbar tensiones presentes ya desde el inicio del Pacto de Unidad y fundamentalmente desde el proceso constituyente.

Dentro de este conflicto se destacaron las marchas llevadas adelante por comunidades indígenas desde el oriente boliviano hacia La Paz, recuperando así la larga tradición de protesta distintiva de los indígenas y campesinos desde los años noventa. Las marchas por el TIPNIS, en algunos de sus tramos, fueron fuertemente reprimidas por fuerzas gubernamentales.

En esa coyuntura, se produjo la escisión del Pacto de Unidad y el surgimiento del paralelismo en CIDOB y CONAMAQ, es decir la génesis para ambas organizaciones de una fracción “oficialista” y fiel al MAS y otra “orgánica” o de oposición al masismo. Los antagonismos en torno a este conflicto continuaron durante el tercer gobierno del MAS.

Empero, a finales del 2014 el binomio Morales-García logró un nuevo triunfo electoral superando el 60% de los votos. Ello le permitió a Evo acceder a su tercer mandato presidencial consecutivo, un record en la historia boliviana.

Hasta el 20 de octubre de 2019, la conflictividad y los antagonismos en el tercer gobierno masista (que fue interrumpido por el Golpe de Estado del 10 de noviembre) giraron fundamentalmente en torno a la re-postulación presidencial, para su cuarto mandato 2020-‘25, de la fórmula Morales-García y el Referéndum Constitucional vinculante realizado el 21 de febrero de 2016.

b. El viraje o corrimiento de muchos/as intelectuales

Dentro del cuadro general descrito y particularmente a partir del conflicto suscitado en torno al TIPNIS, un importante grupo de intelectuales (hasta ese momento cercanos al MAS y al Pacto de Unidad) hicieron públicas sus posiciones contrarias a las políticas gubernamentales del MAS durante ese segundo gobierno. Estas posiciones se profundizarán durante la tercera presidencia de Evo debido a su intento de nueva reelección y la derrota en el “21F”.

Dentro de ese sector de intelectuales se destacó el grupo autodenominado “Manifiesto 22 de junio. Por la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y con el pueblo” (2012). Este grupo estuvo conformado por un total de treinta y ocho integrantes: Raúl Prada, Alejandro Almaraz, Pablo Mamani, Raquel Gutiérrez, Leonardo Tamburini, Pablo Regalsky, Gustavo Soto y Rafael Quispe, como sus figuras más destacadas. Entre sus críticas señalaban las siguientes cuestiones: la continuidad de la pobreza y precariedad y el mejoramiento de banqueros y transnacionales petroleras y mineras; la continuidad del modelo extractivista; el fuerte giro autoritario del gobierno con intimidación sistemática o represión; la concentración del poder; el “prebendalismo” y la distribución corporativa de la administración pública; el abandono de la construcción del Estado Plurinacional; y el daño y agresión a la madre tierra.

En los momentos más álgidos del conflicto por el TIPNIS el gobierno dirigió sus críticas hacia distintas ONG’s bolivianas y a sus cuadros intelectuales, destacándose, el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA) y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), quienes de manera sistemática denunciaron que el paso de la carretera destruiría la biodiversidad del TIPNIS, al tiempo que violaría muchos derechos de

la población residente. En respuesta, dirigentes de ONG's como Tamburini expresaron que la ruptura del gobierno con los pueblos de tierras bajas y con el CEJIS se dio en el marco de este conflicto, fundamentalmente porque “el gobierno tomó otros carriles distintos de la primera etapa”.

Otros intelectuales como Pedro Portugal y Silvia Rivera Cusicanqui sostuvieron desde ángulos diferentes, casi desde los inicios del MAS en el gobierno, un discurso totalmente crítico en cuanto a la ausencia de políticas y prácticas reales (más allá del discurso oficial) en torno a una ruptura con el colonialismo interno y el racismo.

En los primeros meses del 2019 intelectuales de distintos países como la propia Silvia Rivera, Maristella Svampa, Huáscar Salazar y Raúl Prada firmaron una declaración titulada “Carta internacional de respaldo a la Marcha de Naciones Originarias y pueblos indígenas de Bolivia” donde manifestaron su preocupación frente a un Estado que prioriza la propiedad individual frente a la colectiva y el avance del extractivismo como política económica.

Un acontecimiento trascendental: el “21F”

El 21 de febrero del 2016 se realizó un Referéndum Constitucional de carácter vinculante. Su objetivo fue la aprobación o rechazo del proyecto de modificación constitucional para permitir al presidente o vicepresidente del Estado postularse a ser re-electos dos veces de manera continua.

Los resultados dieron un revés a Evo: ganó el “NO” con un 51% de los votos. Particularmente por departamentos la opción “NO” triunfó en seis de ellos (Chuquisaca, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando), y el “SI” venció en tres (La Paz, Cochabamba y Oruro). Los movimientos y sindicatos campesinos afines al gobierno denunciaron que la derrota fue producto de maniobras y difamaciones sobre casos de corrupción que desprestigiaron al gobierno con el fin de que perdiera esta votación.

Sobre el porqué de esta derrota para el MAS se conjugaron diversos factores: las denuncias de corrupción realizadas por los partidos de la oposición y la incapacidad del oficialismo de colocar una figura de alternancia al frente del Ejecutivo. En cuanto a las bases indígenas es importante señalar la importancia que adquirió la oposición de los grupos originarios (tanto del oriente como de tierras altas) a raíz del conflicto del TIPNIS y por el no reconocimiento estatal de muchos territorios indígenas a diferentes comunidades. De hecho, en el tercer período gubernamental del MAS se llevaron adelante otras marchas indígenas, que aunque no tomaron la magnitud de aquellas por la defensa del TIPNIS, visibilizaron la problemática existente entre el MAS y las bases indígenas alejadas del Pacto de Unidad. Ejemplo de ello fueron la movilización de pueblos mojeños contra el avance del Estado en sus tierras (para convertirlas en fiscales) o la movilización desplegada por la “nación Qhara Qhara”, quienes exigían que se les reconozcan sus territorios comunitarios y denunciaban al gobierno por tomar represalias contra aquellas comunidades que apoyaron la defensa del TIPNIS. También en 2018-2019, el movimiento en Tariquía (Tarija), que fue reprimido por el gobierno nacional. Esta represión fue denunciada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.¹⁵

¹⁵ Para más información consultar en *Diario Página Siete*, “Tariquía: la contraofensiva patriarcal que violenta a las mujeres y a las comunidades” 24 de marzo de 2019 <https://www.paginasiete.bo/ideas/2019/3/24/tariquia->

Esta represión fue denunciada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia

No obstante, luego de la derrota del “21F”, el masismo no claudicó en su intento por imponer la candidatura presidencial de Morales de cara a 2019. El IX Congreso Nacional del MAS-IPSP (diciembre de 2016), entre sus principales resoluciones ratificó la candidatura de Evo y propuso cuatro posibles vías para habilitarlo legalmente como candidato: la primera, reformar el artículo 168 de la Constitución de Bolivia mediante una “iniciativa ciudadana”; la segunda, que dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa apruebe la modificación parcial de la Constitución; la tercera, que Morales renuncie unos seis meses antes de que termine el mandato y ello lo habilitaría para presentarse; y la cuarta, solicitar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que realice una interpretación de la Constitución Política del Estado. Casi un año después el TCP, a través de la Sentencia Constitucional 0084/2017, habilitó a Evo Morales y García Linera a re-postularse de manera indefinida. De este modo, Evo obtuvo su pasaje hacia la anhelada “reelección permanente”.

Esta decisión del TCP provocó una rápida reacción de distintos sectores del amplio arco de opositores. Desde referentes de la derecha partidaria como Samuel Doria Medina, quien calificó la sentencia como la consumación de un “Golpe de Estado”, hasta dirigentes kataristas como Felipe Quispe. Sin embargo, las distintas denuncias y acciones directas y en el terreno legal desplegadas por los sectores opositores no impidieron que el partido de gobierno avance en su estrategia.

Así, a mediados de 2018 el II Ampliado Nacional del MAS resolvió “ratificar la postulación del presidente Evo” como la mejor estrategia política para derrotar “a los políticos neoliberales y que nunca más retornen al gobierno”.

Finalmente, en diciembre de 2018 el Tribunal Superior Electoral de Bolivia habilitó la participación del binomio Morales-García para las Elecciones Primarias y Generales del siguiente año. Además de la fórmula oficialista, se presentaron un total ocho binomios opositores para competir electoramente en las presidenciales del 20 de octubre del 2019. Entre los más destacados cabe mencionar a los candidatos Carlos Mesa, Óscar Ortiz y Félix Patzi.

Ayuda internacional, geopolítica y relaciones bilaterales con los EE.UU

A los pocos meses de su primera gestión el MAS-IPSP exhibió un discurso negativo sobre el accionar de la cooperación internacional en Bolivia y su destacadísima actuación en los “tiempos neoliberales” (1985-2005). Sin embargo, durante buena parte de la gestión masista con algunos cooperantes internacionales y países capitalistas “centrales” predominó una relación bilateral, aunque no exenta de tensiones, de amalgamamiento o alineamiento. Tal fue el caso de España, donde en el marco de la renacionalización o renegociación de los hidrocarburos en 2006, la ayuda oficial formó parte de la compleja trama de negociaciones. Distintas evidencias muestran cómo la creciente asignación de recursos económicos en materia de ayuda oficial por parte del Estado Español estuvo condicionada y hasta incluso se mezcló con los grandes intereses capitalistas de la petrolera REPSOL, formando así parte, como una especie de “moneda de cambio”, de las prolongadas negociaciones

entabladas entre la República de Bolivia, vía gobierno masista, y la corporación empresarial REPSOL.

De manera opuesta al caso español, la ingeniería política-gubernamental del MAS colisionó directamente con los principales intereses geoestratégicos promovidos desde Washington. Ya en 2006 funcionarios del MAS denunciaron que la ayuda oficial proporcionada por los EE.UU servía como instrumento directo para la intervención norteamericana en asuntos de política interna de Bolivia, financiando a grupos opositores, promoviendo la desestabilización institucional y socavando la gobernabilidad. Empero cabe señalar que según estadísticas oficiales, EE.UU (junto a Brasil y Argentina) fue durante el período 2006-2009 uno de los principales socios comerciales que tuvo Bolivia.

Ante una coyuntura signada por la creciente polarización social y política entre el gobierno nacional y el bloque de prefectos opositores, como medida defensiva, en los últimos meses de 2008, el MAS profundizó el antagonismo con los EE.UU, tomando para ello substanciales decisiones como la expulsión del embajador estadounidense y la suspensión de todas las actividades de la agencia DEA.

Durante los siguientes gobiernos de Evo los antagonismos y las hostilidades bilaterales entre Bolivia y EE.UU se profundizaron. El 1° de mayo de 2013 Morales expulsó del país a la Agencia de los EE.UU para el Desarrollo Internacional (USAID): un gesto político y simbólico totalmente disruptivo en la historia diplomática entre ambos países.

En ese contexto, un grupo importante de cooperantes internacionales, a diferencia de USAID, acompañó o apoyó abiertamente las iniciativas del gobierno de Morales, destinando fondos y respaldándolo discursiva y políticamente a través de la ejecución de distintas iniciativas. Dentro de este conjunto de donantes se inscribió la Unión Europea quién (al menos hasta 2016), posiblemente apostando al desarrollo y consolidación de una diplomacia que le posibilite un acceso privilegiado a los recursos naturales de Bolivia, se presentó discursivamente como un actor externo dispuesto a colocarse “al servicio de las necesidades de Bolivia”.

El tercer gobierno del MAS también estuvo atravesado por la conflictividad bilateral con los EE.UU. Por ejemplo, ante la coyuntura de re-postulación presidencial de Evo, en 2018 la Casa Blanca caracterizaba que “las relaciones entre nuestros países se han tensado desde que se eligió al presidente Evo Morales y comenzó una política de hostilidad pública hacia los EE.UU. Las elecciones presidenciales programadas para fines de 2019 serán un punto de inflexión en la historia de Bolivia. (...)”.¹⁶ También en esta oportunidad, la Unión Europea, a través de su vocera Maja Kocijancic, alertó que “Bolivia no se conduce a elecciones en condiciones justas y equilibradas”.¹⁷ El propio Evo denunció y rechazó públicamente la injerencia de la Unión Europea y de los EE.UU: “Como en 2002, EE.UU y políticos serviles de derecha tratan de frenar nuestra candidatura con mentiras y desprestigio. (...) Hoy dicen estar preocupados por la democracia. Bolivia es soberana y repudia toda injerencia”.¹⁸

¹⁶ U.S. Department of State. Integrated Country Strategy. Bolivia, agosto de 2018.

¹⁷ Para mayor información consultar en *Erbol*, “Unión Europea dice que Bolivia se dirige a elecciones sin condiciones justas”, 14 de diciembre de 2018. Disponible en <https://erbol.com.bo/noticia/politica/14122018/union-europea-dice-que-bolivia-va-elecciones-sin-condiciones-justas> Fecha de consulta 15 de febrero de 2019.

¹⁸ Extraído de *Diario El Deber*, “Evo rechaza ‘injerencia’; dice que EEUU y serviles rechazan su candidatura”, 17 de diciembre de 2018. Disponible en <https://eldeber.com.bo/bolivia/evo-rechaza-injerencia-dice-que-eeuu-y-serviles-rechazan-su-candidatura-110935> Fecha de consulta 15 de febrero de 2019.

En cuanto a las alianzas internacionales del MAS durante su tercera presidencia, Rusia y China realizaron en esos años diversos acuerdos bilaterales con Bolivia en materia energética (explotación de gas y litio), militar (modernización de las Fuerzas Armadas) y salud (construcción de centros de atención). En 2018 el Estado boliviano, a través de Yacimientos de Litio Bolivianos, suscribió un (polémico) acuerdo con la empresa alemana ACI Systems para la explotación e industrialización del litio en el salar de Uyuni (Potosí). Mientras que en el continente americano, Evo contaba con el escaso apoyo de los gobiernos de países integrantes del ALBA-TCP (como Venezuela y Cuba). Ello en un marco regional de ascenso de gobiernos neo-conservadores y abiertamente reaccionarios, cuyo máximo referente era el presidente de Brasil Jair Bolsonaro.

Conclusiones sobre el “Proceso de Cambio” (2006-2019)

La experiencia política del MAS-IPSP es, sin dudas, un hecho extraordinario e inédito en la historia de Bolivia. Nació como un pequeño partido de base rural-sindical, cuyo núcleo fundacional fueron los cocaleros del Trópico de Cochabamba. En tan sólo una década logró proyectarse a escala nacional y acceder a la presidencia del Estado como corolario de un ciclo de movilizaciones populares contra las políticas neoliberales impulsadas desde 1985. Por ello es necesario colocar el derrotero de los gobiernos masistas (2006-2019) en la historia larga de Bolivia, iniciada en 1825. Desde esta perspectiva histórica, las medidas que adoptó el Movimiento al Socialismo (fundamentalmente entre 2006 y 2009) se encuentran entre las más vanguardistas o progresivas de la historia boliviana.

Por la orientación redistributiva que adoptó su política reformista y el carácter refundacional que intentó imprimirle al Estado, el llamado “Proceso de Cambio” sólo podría encontrar algún tipo de paragón con las medidas adoptadas durante el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario entre 1952 y 1956 (nacionalizaciones, creación de empresas estatales, reforma agraria, sufragio universal, extensión del sistema educativo, etc.). Al igual que en su momento el MNR de Paz Estenssoro, la llegada de Evo Morales a la presidencia abrió una nueva etapa para Bolivia y generó entre las mayorías populares grandes expectativas de transformación social.

La nacionalización (limitada) de los hidrocarburos, la creación del Estado Plurinacional Comunitario con autonomías, la dotación de tierras a sectores rurales pobres, la lucha contra el racismo y un cierto grado de avance en la des-colonización estatal, el notorio incremento del gasto público orientado hacia salud, educación, protección social para la niñez y la tercera edad, la reducción de la pobreza, la estabilidad y el crecimiento económico sostenido, el terreno ganado en materia de soberanía política junto con una reducción notable de la dependencia externa y los fondos provenientes de la “ayuda internacional”, constituyeron los pilares más importantes de las gestiones del MAS al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Al mismo tiempo cabe señalar que ante cada elección presidencial (2009 y 2014), Evo y su partido lograron incrementar la base de votantes en unos 10 puntos promedio respecto de su primera victoria en 2005.

El MAS tuvo su principal oposición en una derecha regionalizada (con serias dificultades para proyectarse a escala nacional) situada en los departamentos del oriente del país, fundamentalmente en Santa Cruz, que de manera permanente contó con el apoyo de los gobiernos imperialistas de los Estados Unidos. Ante una virulenta confrontación en 2007 y 2008, la principal política del MAS fue buscar una salida pactada o negociada, tal como lo demuestra el texto final de la NCPE donde la presión de la derecha hizo que se modifique

parte del articulado resultante de la Asamblea Constituyente. Mediante esta y otras concesiones a la oposición reaccionaria (como permitir el avance del sector terrateniente en la zona del oriente), el masismo buscó blindar al menos temporalmente su gobernabilidad. A cambio, la derecha logró conservar sus históricos privilegios económicos como clase social propietaria. Es decir que Evo, como líder de este proceso político, asumió una cierta orientación de tipo “bonapartista”, en el sentido de conciliar posiciones con las oligarquías de la “media luna” y brindarles protección estatal a sus intereses económicos. Empero, ello no significó la eliminación de conflictos e intereses antagónicos entre la derecha “cívica”, las organizaciones sociales/sindicales y el propio MAS, sino que en líneas generales permanecieron latentes durante largos años.

Asimismo, producto de fuertes contradicciones internas, la relación del MAS con los movimientos sociales fue mutando disruptivamente a partir de su segundo gobierno. Luego de producirse un cierre (transitorio) de los enfrentamientos con el bloque regional de la “media luna”, la principal conflictividad provino desde el interior de las propias organizaciones sociales y sindicatos. En esa coyuntura, el conflicto en torno al TIPNIS (iniciado en 2011) marcó un verdadero punto de inflexión entre el partido de gobierno y algunas de las principales organizaciones indígenas como la CIDOB y el CONAMAQ. Se produjo así una irreversible ruptura interna del bloque social y político agrupado en el Pacto de Unidad. Incluso el propio gobierno ejerció en varias oportunidades formas de violencia directa, a través de la utilización de fuerzas represivas estatales (provenientes del viejo Estado Republicano), contra quienes hasta hace muy poco tiempo formaban parte de “sus bases”. También el masismo buscó diezmar o limitar a su mínima expresión las capacidades organizativas de movimientos disidentes como CIDOB y CONAMAQ mediante la cooptación estatal, el armado de direcciones paralelas y hasta la persecución subrepticia a dirigentes opositores. En ese marco, los movimientos sociales fueron (trágicamente) perdiendo autonomía e independencia en sus decisiones y poco a poco se convirtieron en organizaciones y maquinarias burocratizadas con una escasa capacidad de movilización.

Si bien desde sus inicios en el Ejecutivo el MAS estableció una nueva correlación de fuerzas entre el Estado y las empresas multinacionales (favorable al Estado), en los hechos y sobre la base de consolidar una matriz productiva basada en el extractivismo, el Estado boliviano terminó convirtiéndose en una suerte de socio de las corporaciones privadas. La frase “Bolivia necesita socios, no patrones”, repetida una y otra vez por Morales y distintos funcionarios de su gobierno, sintetiza esa orientación gubernamental. De este modo, aunque sujeto a negociaciones y modificaciones, las multinacionales (como la española REPSOL) garantizaron su permanencia y rentabilidad también en la Bolivia de Evo.

El MAS en el gobierno fue abandonando su retórica anti-capitalista, que contenía ciertos ribetes de avanzar hacia el socialismo, y de cualquier posible colectivización/socialización real y a gran escala de los principales medios de producción. A cambio, profundizó su impronta nacionalista y anti-imperialista (direccionada contra los Estados Unidos) e introdujo discursivamente un difuso modelo de “desarrollo comunitario” en consonancia con el “buen vivir” y el respeto a la Madre Tierra. Además, García Linera intentó teorizar a esa forma de desarrollo (pos-neoliberal) como “capitalismo andino-amazónico”. Un modelo de acumulación sustentado en la heterogeneidad estructural de Bolivia y la consecuente coexistencia de diferentes bloques multisociales a su interior: uno plenamente capitalista; otro rural, urbano y artesanal de carácter mercantil-informal; y un tercer bloque que se mueve en el ámbito comunal. En los hechos, el MAS decidió no avanzar hacia formas de

producción “no-capitalistas”. Contrariamente, garantizó la continuidad de la propiedad privada sobre medios de producción, los privilegios de las oligarquías locales y además se convirtió en una suerte de “socio” de las multinacionales extractivistas.

Por último es importante manifestar que tanto en los ámbitos académicos especializados como al interior del amplio y diverso movimiento popular de Bolivia, está pendiente un profundo y serio debate sobre los alcances, contradicciones y límites del “Proceso de Cambio” y en particular sobre la situación de los movimientos sociales, quienes hace poco más de una década irrumpieron, con sus energías revolucionarias, de manera decisiva en las calles y en la escena política del país para cambiarlo todo. Un álgido debate que irá tomando cuerpo y profundizándose al calor de las luchas populares que, desde el 10 de noviembre del 2019, enfrentan al Golpe de Estado fascista que derrocó al gobierno constitucional del MAS.